

Petition to the
InterAmerican Commission for Human Rights
Prepared in Quito: June, 2010

Background: In June, 2010 – approximately 7 months after the illegal kidnapping and deportation of Gregory James Caton – Cathryn Caton retained an attorney in Quito to examine the case and find legal remedies for addressing the many violations of international and Ecuadorian law that surrounded her husband’s case. In response to this request, Dr. Moreno repaired the following lawsuit.

The estimated cost of litigation was said to run more than \$30,000 – a sum that well exceeded what Mrs. Caton was able to pay. Nonetheless, the importance of this document remains . It well summarizes the extreme lawlessness surrounding the case and highlights the many laws that were committed by the U.S. State Department, acting through its Consulate Office in Guayaquil, as well as the Ecuadorian authorities who were secretly acting upon the dictates of the Consulate.

Australian litigator Jerry Prus-Butwilowicz, himself a former prosecutor with the International Court at the Hague, examined this case in considerable detail – pro bono – and came to the conclusion that not only had the U.S. State Department committed a potpourri of international law violations, but that the Ecuadorian authorities involved – even under a liberal interpretation of Ecuadorean law – had committed high treason.

This document is provided to elucidate those violations.

What follows is the original petition, drafted in Spanish, followed by its English translation.

Quito, 9 de junio de 2010

Señor Doctor
Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington, D.C.-

***Ref.: Petición por la violación de los derechos del señor JAMES GREGORY
CATON (ECUADOR)***

Estimado doctor Cantón:

De acuerdo con las instrucciones recibidas del señor James Gregory Caton, ciudadano estadounidense, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, presento la petición que se detalla a continuación, en la que se describen hechos violatorios a los derechos humanos y que han sido ejecutados por autoridades de la República del Ecuador

I. Hechos que generan la petición y que constituyen violación a los derechos humanos del señor Gregory James Caton

El señor GREGORY JAMES CATON es un ciudadano estadounidense, que ha dedicado gran parte de su vida al desarrollo y comercialización de cremas tópicas medicinales, en base a hierbas naturales, dentro y fuera de Estados Unidos, las cuales, en numerosas ocasiones, resultaron muy efectivas incluso en contra del cáncer de piel.

En el año 2004 fue condenado, en su país natal, por supuesta producción y venta de remedios no aprobados por la FDA, siendo liberado en Junio de 2006, tras lo cual se domicilió en Ecuador, donde ha fundado una compañía a través de la cual comercializa lícitamente productos extraídos de plantas nativas, la cual ha tenido una gran acogida en

el mercado nacional e internacional. El señor Caton siempre mantuvo una visa otorgada por las autoridades ecuatorianas que le permitía permanecer legalmente en el Ecuador.

Sin motivo alguno, pero y por el sólo hecho de continuar produciendo LICITAMENTE productos naturales en base a plantas medicinales reconocidas en el Ecuador, la INTERPOL emitió un alerta ROJA, lo cual ya en sí mismo resulta bastante extraño, pues, de acuerdo a lo publicado en la página de Internet OFICIAL de esta institución, las labores de la misma se centran en la seguridad pública; el terrorismo; el crimen organizado; tráfico de drogas, entendido este como tráfico de estupefacientes naturales o sintéticos; tráfico de armas; tráfico de personas; blanqueo de dinero; pornografía infantil; crímenes económicos y la corrupción. Es evidente Señor Secretario Ejecutivo que de ninguna manera la actividad del señor Caton tiene absolutamente nada en relación con los crímenes que deben ser investigados por esta organización.

Sin embargo, es en base a esta alerta roja, que se inicia en la Provincia del Guayas, Ecuador, una supuesta Indagación Previa en contra del señor James Caton por fraude y malformaciones, investigación que JAMAS prosperó ni ha sido llevada adelante, pero que sirvió para emitir una orden de detención por 24 horas en su contra, por parte del Juez Primero de Garantías Penales, infringiendo así la ley ecuatoriana. Dicha detención fue llevada a cabo por el Capitán de Policía WILSON REYES, Oficial coordinador del Consulado Americano en Guayaquil, quien NO tenía a su cargo investigación alguna, y quien, por lo tanto tampoco tenía el poder para tomar preso al señor Caton. Lo cual hace presumir la existencia de presiones indebidas sobre la tal agente de la Policía Nacional.

Una vez en prisión, James Gregory Caton es puesto, por el Capitán de Policía Wilson Reyes y ratificado AL DIA SIGUIENTE por el Mayor Galo Pérez Dávila, a órdenes de la Intendencia de Policía de Guayaquil, para que ordene su deportación, infringiendo nuevamente la ley ecuatoriana, la cual establece que la UNICA autoridad que tiene autorización para realizar una detención con fines de deportación es la Policía de Migración, a la cual, ni el Capitán Reyes, ni el Mayor Pérez pertenecen o se encontraban asignados en aquel momento.

Dada de esta manera la situación del señor Caton, Intendente de Policía de Guayas¹, Abogado Julio César Quiñonez Ocampo, avoca conocimiento del expediente de deportación del mencionado ciudadano ecuatoriano, el día 4 de Diciembre de 2009 aproximadamente a las 11H00, fijando fecha Audiencia de Deportación, el mismo día 4 de Diciembre a las 14H00, misma que por su complejidad, tiene una duración de alrededor de 2 horas y media, y luego de la cual el Intendente ordena la inmediata deportación del ciudadano en cuestión. Dicha resolución fue apelada, debiendo conocer el proceso el Juez Octavo de Garantías Penales, quien avoca conocimiento del caso el día 8 de Diciembre del mismo año, y llama a Audiencia para el día 9 del mismo mes y año, donde ratifica la resolución tomada por el Intendente de Policía. Es importante señor Relator, que el Juez Octavo de Garantías Penales envía el proceso al inferior (Intendente), aún ANTES de los 3 días que la ley establece para que la sentencia pueda ejecutoriarse. Efectivamente, ese mismo día, el señor Caton fue puesto en un avión de la Compañía American Airlines, pese a las protestas del Juez Décimo de Garantías Penales de Guayaquil, ante quien se había instaurado una acción de protección en un vano intento por hacer valer los derechos del ciudadano americano, aeronave que, desconociendo los pedidos de esta autoridad, traslado al señor Caton a la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Se debe destacar que en el procedimiento ante el Juez, esto es en la apelación, si bien se dio una audiencia, no es menos cierto que la resolución adoptada por el juez carece de motivación. En efecto, el juez resuelve la apelación en los siguientes términos:

“...En este estado habiendo escuchado detenidamente las exposiciones de las partes intervinientes en esta audiencia considerando a) Que si bien es cierto la Constitución de la Republica consagra derechos y garantías constitucionales a los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador y extranjeros los jueces tenemos la obligación de garantizar igualmente el debido proceso, por lo tanto en aras de la economía procesal y en merito al sistema oral este suscrito Juzgador de garantías penales resuelve, negar la petición formulada por el recurrente y confirma en todas sus partes la sentencia recurrida disponiendo que regrese para que el señor Intendente continúe con el pertinente tramite

¹ El Intendente General de Policía es una autoridad de carácter administrativo, dependiente de la Función Ejecutiva que ejerce ciertas atribuciones de carácter jurisdiccional.

de deportación, sin otro detalle que analizar por la presente en la brevedad posible cúmplase lo dispuesto , firmando para con el señor Juez y Secretaria que certifica.”

Es importante señalar que ni el Intendente General de Policía ni el Juez Octavo de Garantías Penal del Guayas contó con el Cónsul de los Estados Unidos de América en los procedimientos iniciados en contra del señor Gregory Caton.

De igual manera, se debe informar a la Comisión que nunca se inició un proceso de extradición ante las autoridades ecuatorianas, con el fin de obtener que el señor Caton pueda objetar su traslado a los Estados Unidos de América.

Por otra parte, se debe indicar que el señor Gregory Caton se encontraba en el Ecuador amparado bajo una visa 9-VI (al amparo de su cónyuge inversionista en el Ecuador). Así, resultaba claro que el ingreso y permanencia en el Ecuador, de dicho ciudadano, era lícita. Sin embargo, luego de que se produce la detención del señor Caton, las autoridades de extranjería, sin notificación ni proceso previo proceden a cancelar la visa. que le permitía permanecer en el Ecuador. El señor Caton nunca fue notificado ni con la iniciación del proceso administrativo ni con la resolución que cancelaba la visa.

En la actualidad el señor Caton se encuentra en una prisión en el Estado de Florida, Estados Unidos de América.

II. El Estado del Ecuador ha violado los derechos garantizados en los Arts. 7, 8, 9 y 25 de la Convención Americana todo ello en relación con los Arts. 1.1 y 2 de la misma Convención.

El Art. 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone:

“Art. 7.- Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4. Toda persona detenida y retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella...”

En el presente caso el señor Caton fue víctima de una arbitraria privación de la libertad, pues por una parte, si bien en inicio se le privó de la libertad con fines de investigación de un supuesto delito, no es menos cierto que concluida tal investigación a las 24 horas, el señor Caton debió ser puesto en libertad, sin embargo de forma arbitraria e irregular sin haber tomado en cuenta las normas vigentes en el Ecuador que regulan el debido proceso de la detención que establecen que los únicos autorizados para la detención de una persona con fines de deportación es la Policía de Migración, se le mantuvo detenido en manos de la Policía Nacional para luego ser entregado a una autoridad administrativa, como lo es el Intendente de Policía del Guayas. Con ello, se violó su derecho a la libertad y seguridad personales, además de que no se cumplió ni con las causas ni las condiciones que fijan la Ley Ecuatoriana. Cabe señalar que el artículo 7 de la Convención Interamericana sobre derechos Humanos, ratificada por el Ecuador ordena: “...2. **Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas...**” (negritas y subrayado son míos).

La violación del Derecho a la Libertad personal también se dio en el momento que cumplidas las 24 horas de detención no fue puesto en libertad, más aún cuando dentro de los procesos de deportación no procede la imposición de la prisión, sino de manera excepcional, sino que debió ordenarse cualquier otra medida sustitutiva a la prisión preventiva. Sin embargo, en el caso del señor Caton se le mantuvo en prisión preventiva sin opción a obtener una medida sustitutiva o cautelar distinta.

Por otra parte, el Art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone:

“Art. 8.- Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

- a) derecho del inculcado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
 - b) comunicación previa y detallada al inculcado de la acusación formulada;
 - c) concesión al inculcado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
- ...”

En el caso del señor Caton se han violado por parte de las autoridades ecuatorianas varios de los derechos reconocidos en esta norma. En efecto, el Estado al mantener hasta la fecha al Intendente General de Policía en calidad de juez, pese a tener la calidad de una autoridad administrativa se le priva del derecho a ser oído por un juez en la determinación de una sanción. De hecho, la audiencia de juzgamiento se da ante esta autoridad administrativa con lo cual se le ha privado del derecho a contar con una autoridad judicial, en los términos previstos en la Convención. Por ello, esta violación se ha dado también relación con el Art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De igual manera, en este caso se ha violado el derecho a la presunción de inocencia, pues sin que exista prueba en los términos previstos por la legislación ecuatoriana, esto es la existencia de un documento legalizado y traducido de conformidad con la Ley, con la posibilidad de ejercer la contradicción probatoria, se presumió la culpabilidad del señor Caton, pues el Intendente de Policía resolvió imponer la deportación única y exclusivamente en base a un documento impreso sin que reúna los requisitos previstos bajo la Ley ecuatoriana en cuanto al valor de la prueba documental. De esta manera, el señor Caton en la práctica nunca gozó de la presunción de inocencia mientras era procesado administrativamente, proceso que concluyó con la condena a la deportación.

Se debe recordar que esta garantía del debido proceso reconocida en el Art. 8 (2) de la Convención, conforme lo ha resuelto la Corte Interamericana, en el caso *Claude Reyes vs. Chile* debe ser respetado dentro del proceso administrativo. En efecto, la Corte ha resuelto que:

“116. El artículo 8 de la Convención Americana se aplica al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, cualesquiera que ellas sean, a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos².”

En relación con la norma del Art. 8 de la Convención se debe considerar además que en el propio ordenamiento interno ecuatoriano se reconocen normas que deben ser aplicadas en cuanto regulan la protección del debido proceso, así la Constitución al regular el debido proceso ecuatoriano en sus principios de contradicción, oportunidad e interpretación, en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “*En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: ...7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa...*” (negritas y subrayado son míos).

Es evidente, señor Secretario Ejecutivo, que es humana y materialmente imposible preparar y sustentar un proceso en menos de 3 horas, que es lo que el Intendente otorgó al señor Caton para la preparación de su defensa. Esta conducta estatal viola de manera directa el Art. 8(2)(c) de la Convención, pues en un lapso tan corto resultaba imposible preparar adecuadamente la defensa, más aún cuando al mismo tiempo se iniciaba otro proceso administrativo destinado a extinguir la visa, proceso sobre el cual no se conocía su existencia. Por ello, este último proceso fue esencialmente arbitrario.

La violación del Art. 8 de la Convención se dio también por el hecho de utilizar un procedimiento destinado a la sanción por la ilegalidad migratoria, es decir el ingreso ilegal y permanencia en el país, para otro fin, esto es el obtener una extradición que de haberse seguido por la vía regular habría sido imposible. En efecto, el Estado a través del procedimiento de deportación buscó entregar al señor Caton a las autoridades de los Estados Unidos de América, para que pueda cumplirse con la imposición de una pena

² Cfr. Caso YATAMA, *supra* nota 86, párr. 147; Caso Ivcher Bronstein, *supra* nota 72, párr. 102; Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 124; y Caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 69.

privativa de la libertad. Sin embargo, de haberse seguido el proceso de extradición, que el es debido proceso para la remisión de una persona con fines penales a otro estado, no habría sido posible hacerlo, pues no se habría cumplido con el requisito fundamental de que el delito se encuentre tipificado en las dos jurisdicciones. Inclusive, en el documento impreso de la página web de la INTERPOL, que fue utilizado para disponer la deportación se establecía que la detención debía ejecutarse para procurar la extradición.

De igual manera, conforme lo ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-16, al tratarse de un ciudadano extranjero, él debió contar en este proceso con la protección consular, sin embargo en ningún momento se le brindó dicha garantía, con lo que se violó también una garantía judicial.

En virtud de todo lo señalado, se violó el Art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio del señor Gregory Caton, puesto que no contó con un juez, se le privó de la presunción de inocencia, no se concedió el tiempo necesario para la defensa de sus derechos, se aplicó un proceso distinto para evadir la protección que un procedimiento de extradición le he habría concedido y se le privó de la publicidad y defensa en el proceso administrativo de cancelación de la visa. Todo ello, conduce a concluir que el Estado Ecuatoriano es responsable por tales violaciones.

El Ecuador ha violado también el Art. 25 de la Convención Americana que dispone:

“Art. 25.- Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”

En el presente caso al señor Caton se le privó del derecho a obtener la protección de un recurso sencillo y rápido, esto es la acción de protección, pues mientras se intentaba obtener la protección de los derechos del señor Caton a través del Juez Décimo de Garantías Penales, el señor Gregory Caton fue deportado cuando aún se encontraba pendiente de resolución dicho recurso. Con ello, perdió toda posibilidad de protección en la realidad, que le pudo brindar dicha acción. Evidentemente, al haberse ejecutado la deportación mientras se encontraban pendiente dicha fórmula protección judicial, el Estado violó la convención, pues no se le dio la oportunidad de que el aparato judicial le ampare frente a las violaciones de las cuales fue víctima.

De igual manera, resulta claro que la ausencia de motivación en la resolución del Juez Octavo de Garantías Penales del Guayas en el proceso de apelación ante lo resuelto por el Intendente de Policía determina la arbitrariedad de lo decidido. Un recurso que es rechazado sin motivación ni explicación jurídica alguna es un recurso que carece de eficacia y validez. Se debe recordar que la Corte Interamericana en el antes citado caso *Claude Reyes vs. Chile* sostuvo:

“120. La Corte ha establecido que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias³.”

Evidentemente, al carecer de motivación lo resuelto por el juez en la apelación y por ello ser una decisión arbitraria se puede concluir que el señor Caton no contó con un recurso en los términos previstos por la Convención Americana. En consecuencia es evidente que el Estado ha violado el Art. 25 de la misma.

Sin duda alguna la violación de todos los derechos antes mencionados se encuentran directamente relacionados con la violación del Art. 9 de la Convención que reconocer el principio de legalidad. En efecto, el señor Caton fue deportado bajo el argumento de que era un delincuente que no podía ser juzgado en el Ecuador. Sin embargo, dicho

³ Cfr. *Caso Palamara Iribarne*, *supra* nota 72, párr. 216; y *Caso YATAMA*, *supra* nota 86, párr. 152. Asimismo, cfr. *García Ruiz v. Spain [GC]*, no. 30544/96, § 26, ECHR 1999-I; y *Eur. Court H.R., Case of H. v. Belgium*, Judgment of 30 November 1987, Series A no. 127-B, para. 53.

argumento en el presente caso constituye una violación del Art. 9 de la Convención. En efecto, se le consideró al señor Caton delincuente sobre la existencia de hechos que no constituyen infracción en el Ecuador. Evidentemente, a ninguna persona se le puede considerar infractor cuando la Ley nacional no reconoce tal infracción, sin embargo el Ecuador resolvió considerarle como delincuente en ausencia de norma.

Es igualmente importante destacar que la sola vigencia de la norma contenida en la Ley de Migración del Ecuador que permite la deportación de un delincuente en el evento de que una persona no pueda ser juzgada en el Ecuador viola los derechos al debido proceso y presunción de inocencia. En efecto, como se analizó antes, la fórmula procesal prevista para el traslado de un delincuente o de un acusado por un delito es la vía de extradición, con lo que se busca proteger los derechos de tales personas.

En vista de todo lo descrito se ha incurrido en violación del Art. 1.1 de la Convención y 2 de la misma.

III. La petición reúne los requisitos de admisibilidad previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos

De conformidad con lo antes expresado la petición reúne los requisitos de admisibilidad de conformidad con lo requerido dentro del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos.

- a) Los hechos que han sido descritos constituyen una descripción de conductas que constituyen violación a los derechos humanos del señor Gregory James Caton. Estas violaciones han sido cometidas por agentes de Estado ecuatorianos;
- b) La denuncia se presenta dentro de los 6 meses posteriores a que el señor CAton fue notificado de la decisión final, es decir de lo resuelto por el Juez Octavo de Garantías Penales del Guayas, el 9 de diciembre de 2009, en la que se negó el recurso de apelación. Conforme se ha indicado, esta negativa carece de motivación;
- c) No existe duplicidad de procedimientos, estos hechos no han sido puestos en conocimiento de otros organismos internacionales;

- d) Los recursos de la jurisdicción interna han sido agotados. En efecto, con la interposición y resolución del recurso de apelación ante el Juez Octavo de Garantías Penales del Guayas y la interposición de la acción de protección ante el Juez Décimo de Garantías Penales del Guayas, los recursos de la jurisdicción interna se encuentran agotados.

El recurso de apelación ante el Juez Octavo de Garantías Penales era un recurso adecuado, pues estaba destinado a dejar sin efecto la resolución de carácter administrativa del Intendente de Policía del Guayas, sin embargo al carecer de motivación tornó a dicho recurso en ineficaz dada la arbitrariedad de la resolución conforme se analizó anteriormente. Por otra parte, la acción de protección habría resultado adecuada y eficaz si se habría respetado lo decidido por el Juez en cuanto se buscó impedir que se ejecute la deportación, sin embargo al haberse dejado de cumplir lo ordenado por el Juez este recurso también fue ineficaz con lo que queda demostrado que los recursos internos se encuentra agotados, más aún cuando el señor Caton fue ya deportado del Ecuador y no existe recurso alguno en la jurisdicción ecuatoriana con el cual pueda retornársele al Ecuador.

En virtud de todo lo señalado se encuentran cumplidos todos los requisitos de admisibilidad de la petición.

IV. Petición

En virtud de todo lo antes señalado se solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente:

1. Que se dé inicio a la tramitación de la presente petición y se transmita al Estado Ecuatoriano las partes pertinentes de la misma;
2. Que se declare admisible la presente petición;
3. Que luego de la tramitación prevista en el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se declare que el Estado Ecuatoriano ha violado los derechos reconocidos en los Arts, 7, 8, 9 y 25 de la

Convención Americana sobre derechos Humanos en perjuicio del ciudadano estadounidense James Gregory Caton;

4. Que se ordene la reparación como consecuencia de dicha violaciones de conformidad con lo previsto en el Derecho Internacional;

V. Comunicaciones

Cualquier comunicación la recibiré en la siguiente dirección:

Estudio Jurídico Moreno di Donato

Avenida República del Salvador N34-12 y Portugal

Twin Towers 8avo piso

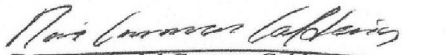
Quito Ecuador

Tel (593-2)2277727

Fax (593-2)2273776

Correos Electrónicos: roberto@morenodidonato.com; mccalderon@fclaw.com.ec

Atentamente,


Dra. María del Carmen Calderón

Quito, June 9, 2010

Doctor
Santiago Canton
Executive Secretary
Inter American Commission of Human Rights
Washington, D.C.-

Ref.: Petition for the violation of rights of Mr. JAMES GREGORY CATON (ECUADOR)

Dear Doctor Canton:

In accordance with the instructions received from Mr. Gregory James Caton, American citizen and in compliance with the Art. 44 of the American Convention of Human Rights, I present this petition that is detailed below wherein human rights have been violated by the authorities of the Republic of Ecuador.

I. Facts that generate the petition and constitute the violation to the human rights of Mr. Gregory James Caton

Mr. GREGORY JAMES CATON is an American citizen who has dedicated most of his life to the development and marketing of medicinal creams of external use that are produced with natural herbs. These were sold in and out of the United States and were very effective in many occasions, including against skin cancer.

In 2004, he was condemned in his country for the alleged production and marketing of remedies that were not approved by the FDA. He was released in June, 2006. Then, he moved to Ecuador where he founded a company that legally markets products extracted from native plants which have been successful in the national and international markets. Mr. Caton always had a visa issued by the Ecuadorian authorities that allowed him to legally stay in Ecuador.

With no reason at all and for the only fact of continuing with the LEGAL production of natural products based in medicinal plants of Ecuador, the INTERPOL issued a RED alert. This fact is very strange because, according to the published information that is found on the official web page of this institution, its activity is centered in public safety such as terrorism, organized crime, drug trafficking (natural or synthetic stupefacient substances), arms trafficking, money laundering, child pornography, economical crimes and corruption. It is evident that Mr. Caton's activity has no relationship with the crimes that should be investigated by this organization.

However, based on this red alert, an alleged investigation started against Mr. Caton for fraud and malformations, such things did not continue but served to issue an arrest order lasting 24 hours. It was issued by the First Judge of Criminal Guarantees, thus violating the Ecuadorian law. Such arrest was carried out by the Police Captain Wilson Reyes, coordinator of the American Consulate in Guayaquil. He did

not conduct any investigation and did not have the authority to arrest Mr. Caton. This fact suggests the existence of illegal pressures on such a police agent.

Gregory James Caton, once imprisoned by Captain Wilson Reyes, and ratified the following day by the Chief of Police Galo Perez Davila of the Police Department of Guayaquil, was then ordered deported, violating the Ecuadorian law once more. Such law establishes that the ONLY authority that has power to arrest in order to deport is the Immigration Police -- to which neither Captain Reyes nor Perez belong, nor were they allocated to this entity at that moment.

With the foregoing situation of Mr. Caton, Police Mayor of Guayas, Atty. Julio Cesar Quiñonez Ocampo, took over the case of the deportation of the above mentioned Ecuadorian citizen on December 4, 2009 at approximately 11H00, and treated it with expedience. He set the date for the Deportation Hearing on the same day, December 4, at 14H00. Because of its complexity, it lasted around two and a half hours. After it ended, the Mayor ordered the immediate deportation of the mentioned citizen. Such resolution was appealed and the Eighth Judge of Criminal Guarantees, knowing the process, took over the case on December 8 of the same year and called for a Hearing on the ninth day of the same month and year, where the resolution taken by the Police Mayor was acknowledged. Mister Reporter, it is important to note that the Eighth Judge of Criminal Guarantees sent the process to the lower authority (Mayor), even BEFORE the three days that the law establishes to get a judgment had expired. Effectively, on that same day, Mr. Caton was placed in an American Airlines plane despite the protests of the Tenth Judge of Criminal Guarantees of Guayaquil before whom a protection petition was established in a vain attempt to assert the American citizen's rights. Said aircraft, ceasing to recognize the orders of this authority, took Mr. Caton to Miami, United States.

It must be emphasized that in the proceeding before the Judge, in this appellate hearing, it is not an exaggeration to say that the adopted resolution by the judge lacks of sound reasoning. In effect, the Judge resolves the appeal in the following terms:

"...In this State, after thoroughly hearing the expositions of the parties involved in this Hearing, considering a) that the Constitution of the Republic establishes constitutional rights and guarantees to the citizens of Ecuador and foreigners. We, the judges, have the obligation to guarantee the legal process. Therefore, for the sake of the procedural economy and in merit to the oral system, this undersigned Judge of Criminal Guarantees resolves to deny the petition of the appellant and confirms in all its parts the appellate judgment ordering the return (of the accused) so the Mayor can continue with the relevant procedure of deportation. Without any other detail to analyze and as soon as possible, (we should) comply with what has been established, signing by the Judge and the Secretary who certifies it."

It is also important to indicate that neither the General Mayor of the Police nor the Eighth Judge of Criminal Guarantees of Guayas counted with the American Consulate in the process initiated against Mr. Gregory Caton.

In the same way, the Commission should be informed that an extradition process was never initiated before Ecuadorian authorities with the purpose of having Mr. Caton object to his transfer to the United States of America.

On the other hand, it should be known that Gregory Caton was in Ecuador protected by a 9-VI VISA (under his wife's visa, an investor in Ecuador). That way, it was clear that the entrance and presence of this citizen in Ecuador was legal. However, after Mr. Caton's arrest, the immigration authorities, without any previous notice or process, proceeded to cancel his visa. Mr. Caton was never notified neither by the initiation of the administrative process nor by the resolution to cancel his visa.

Currently, Mr. Caton is in prison in the State of Florida, United States. *{Editor's Note: Mr. Moreno, the attorney who drafted this document, did not know that Caton was transferred from FDC Miami in January and shipped to a federal holding facility in Breau Bridge, Louisiana – where he was held until being shipped to Beaumont, Texas, in mid-June}.*

II. The Ecuadorian State has violated the rights guaranteed on Articles 7, 8, 9 and 25 of the American Convention; all of them related to the Articles 1.1 and 2 of the same.

The Article 7 of the American Convention about Human Rights stipulates:

“Art. 7- Right to Personal Freedom

1. Every person has the right to personal liberty and security.
2. Nobody can be deprived of their physical liberty, except by the causes and conditions determined beforehand by the Political Constitutions of the Participating States or by the laws issued in accordance with them.
3. Nobody can be arbitrarily held in prison.
4. Every person who is arrested and detained must be informed of the reasons of such arrest and notified, without delay, the charge or charges formulated against him/her...”
5. In this case, Mr. Caton was a victim of an arbitrary imprisonment. On the one hand, he was imprisoned with investigation purposes of an alleged offense; it is not less truth that once such investigation was concluded, after 24 hours, Mr. Caton should have been released. However, in an arbitrary and irregular manner, without respecting the current laws in Ecuador, he was arrested by the National Police and later transferred to an administrative authority such as the Police Mayor of Guayas. According to the laws, the Immigration Police is the only entity authorized to arrest a person with the purpose of deportation. His right to personal freedom and security was violated and the causes and conditions established by the Ecuadorian Law were not respected. It is worth mentioning that Article 7 of the Inter-American Convention about Human Rights, acknowledged by Ecuador, orders: “...2. **Nobody can be deprived of their physical liberty, unless by the causes and conditions determined beforehand** by the Political Constitutions of the Participating States or **by the laws** issued in accordance with them...”(bold and underlined text is mine).

The violation to the Right to Personal Freedom happened for not being released after serving 24 hours of arrest. Additionally, the imposition of prison is not applicable in the process of deportation, but, as an exceptional measure. There should have been an alternative

measure to preventive prison. However, in Mr. Caton's case, he was kept in preventive prison without the option to obtain an alternative or cautionary measure.

On the other hand, Article 8 of the American Convention of Human Rights stipulates:

"Art. 8. - Legal Guarantees

1. Every person has the right to be listened to, with the due guarantees and within a reasonable deadline by a competent, independent and neutral judge or court established in advance by the law in the examination of any criminal accusation formulated against him or her, or to determine his or her civil, working or any other rights and obligations.
2. Every person who is prosecuted of crime has the right to be considered innocent until his or her guilt is legally established. During the process, every person has the equal right to the following minimal guarantees:
 - a) The right to be assisted by a translator or interpreter with no cost if he or she does not understand or speak the language of the court;
 - b) Previous and detailed communication of the formulated accusation to the accused.
 - c) The time and adequate means to prepare the defense of the accused...."

In Mr. Caton's case, various rights recognized in this law were violated by Ecuadorian authorities. In effect, the State denied Mr. Caton the right to be heard by a judge in order to determine a sanction. Instead, the General Mayor of Police acts as a judge until the present date even though he is an administrative authority. In fact, the hearing was held before this administrative authority, denying the accused the right to count with a judicial authority as established in the Convention. For this reason, this violation relates to Article 2 of the American Convention of Human Rights.

Also, the right to the presumption of innocence has been violated in this case because Mr. Caton was considered guilty without legal proof such as the existence of a legal and translated document with the possibility of arguing the contradiction. The Police Mayor resolved to impose the deportation based on only one printed document without having the requirements established by the Ecuadorian Law in order to have documented proof. This way, Mr. Caton was never benefited with the presumption of innocence while he was processed administratively. Such process concluded with his deportation.

It should be remembered that the guarantee of this legal process recognized in Article 8 (2) of the Convention, resolved by the Inter American Court, in the case of Claude Reyes vs. Chile should be respected in the administrative process. In effect, the Court has resolved that:

"116. The Article 8 of the American Convention is applied to the group of requirements that should be observed in the procedural instances, whichever these can be, so the person can defend himself/herself adequately before any act from the State that can affect his or her rights²."

In relation with Article 8 of the Convention, it should also be considered that the same Ecuadorian internal laws recognize laws that should be applied in order to regulate the protection of such legal processes. Therefore, the Constitution regulating the Ecuadorian process in its principles of contradiction, opportunity and interpretation in Article 76 of the Constitution of the Republic of Ecuador, establishes that: **"In all processes where rights and obligations of any kind are set forth, the right to due process of law shall be ensured, including the following basic guarantees:** ... 7. The right of persons to defense shall include the following guarantees:
a) No one shall be deprived of the right to defense at any stage or level of the proceedings.
b) **To have the time and means to prepare for one's defense..."** (Bold and underlined text is mine)

It is evident, Mr. Executive Secretary, that it is human and materially impossible to prepare and support a process in less than 3 hours. This is what the Mayor granted Mr. Caton for the preparation of his defense. This conduct directly violates Art. 8(2)(c) of the Convention because it was impossible to adequately prepare his defense in such a short period of time. Additionally, at the same time another administrative process started, it was assigned to extinguish his visa. Its existence was unknown. Therefore, this last process was essentially arbitrary.

The violation to Article 8 of the Convention also occurred for using a procedure assigned to the sanction for migratory lawlessness, in other words the illegal entrance and permanence in the country. Acting legally, it would have been impossible to be extradited. In effect, the State, through a deportation process, found a way to send Mr. Caton to authorities of the United States of America so they could arrest him. However, if the extradition process would have been followed, which is the legal process to transfer a person with criminal purposes to another state, it would not have been possible because the fundamental requirement was not complied with. This requirement is to have the crime covered in the two jurisdictions. Also, in the document found on the web page of the INTERPOL which was used to order the deportation, it was established that the arrest should have been executed in order to procure the extradition.

In the same way, in accordance with the resolution of the Inter American Court of Human Rights, in its Advisory Opinion OC-16, as he is a foreign person, he should have counted with the consular protection in this process. However, he was not provided with such guarantee at any moment, whereupon the judicial guarantee was also violated.

By virtue of all the above mentioned, Article 8 of the American Convention about Human Rights was violated to the detriment of Mr. Gregory Caton because the process did not count with a judge. He was deprived of the presumption of innocence; he was not given the time necessary to defend his rights; a different process was applied in order to evade the protection that an extradition process would have conceded him; and he was deprived of notice and defense in the administrative process of the cancellation of his visa. All of that leads to conclude that the Ecuadorian State is responsible for such violations.

Ecuador has also violated Article 25 of the American Convention that stipulates:

“Art. 25.-Judicial Protection

1. Every person has the right to a simple and rapid appeal or any other effective appeal before the competent judges or courts in order to protect him or her against acts that can violate their fundamental rights recognized by the Constitution, the law or the present Convention, even though such violation would be committed by people who act in the exercise of their official functions.
2. The Participating States have a commitment to:
 - a) Guarantee that the competent authority provided by the legal system of the State will decide about the rights of every person that lodges such resource;
 - b) Develop the possibilities of the judicial resource, and
 - c) Guarantee the compliance by the competent authorities of all the decisions where the resource was estimated proper.”

In the present case, Mr. Caton was deprived of the right to obtain protection of a simple and rapid resource; this is the petition of protection. While the Tenth Judge of Criminal Guarantees was trying to obtain the protection of the rights of Mr. Caton, he was deported even when the resource was pending of resolution. With that, he lost all possibility of protection that such petition would have granted him. Evidently, executing the deportation while such judicial protection formula was still pending, the State violated the convention since he was not given the opportunity to have the judicial system to protect him against these violations that he was a victim of.

In the same way, it is very clear that the absence of reasoning in the resolution by the Eighth Judge of Criminal Guarantees of Guayas before the Police Mayor’s resolution, demonstrated the arbitrariness of the decision in the appeal process. A resource that is rejected without any legal reasoning or explanation is a resource that lacks any efficiency and validity. It should be remembered that the Inter American Court, as in the aforesaid case of Claude Reyes vs. Chile, upheld:

“120. The Court has established that the decisions that the internal organisms adopt which can affect the human rights should be legally supported, otherwise they would be arbitrary decisions³.”

Evidently, since the judge’s resolution lacked any reasoning in the appeal and therefore was an arbitrary decision, we can conclude that Mr. Caton did not count with a resource in the foreseen terms of the American Convention. In consequence, it is evident that the State has violated its Article 25.

Without any doubt, all of the aforesaid violated rights are directly related to the violation of Article 9 of the Convention that recognizes the Rule of Law. In effect, Mr. Caton was deported under the argument that he was a criminal who could not be judged in Ecuador. However, in the present case, such argument constitutes a violation to Article 9 of the Convention. In effect, Mr. Caton was considered an offender because of the existence of facts that do not constitute a violation in Ecuador. Evidently, nobody can be considered an offender when the National Law does

not recognize such violation. However, Ecuador determined to consider him as an offender in absence of a rule.

It is equally important to mention that the validity of the rule contained in the Immigration Law of Ecuador that allows the deportation of an offender in the event that a person cannot be judged in Ecuador, violates the rights to the legal process and presumption of innocence. In effect, as has been analyzed above, the foreseen procedural formulation for the transfer of an offender or an accused of a crime is the extradition process, which itself attempts to protect those people's rights.

Based on all of the described above, Articles 1.1 and 2 of the Convention were violated.

III. The petition meets the requirements of admissibility foreseen in the American Convention about Human Rights

In accordance with the aforesaid, the petition meets the requirements of admissibility according with the required in the Inter American Protection System to Human Rights.

- a) The facts that have been described constitute a description of the conduct that considers a violation to the human rights of Mr. Gregory James Caton. These violations were committed by agents of the Ecuadorian State.
- b) The report was presented within six months after Mr. Caton was notified of the final decision: this means the resolution taken by the Eighth Judge of Criminal Guarantees of Guayas, on December 9, 2009 where the recourse to appeal was denied. According to the mentioned, this denial lacks of reasoning.
- c) The duplicity of procedures does not exist; these facts have not been brought to the attention of the other international organizations.
- d) The resources of the internal jurisdiction have been exhausted. In effect, with the lodging and resolution of the recourse to appeal before the Eighth Judge of Criminal Guarantees of Guayas and the lodging of the action of protection before the Tenth Judge of Criminal Guarantees of Guayas, the resources of the internal jurisdiction are exhausted.

The recourse to appeal before the Eighth Judge of Criminal Guarantees was an adequate resource since it was allocated to leave without effect the administrative resolution of the Police Mayor of Guayas. However, lacking of reasoning, such resource became ineffective because of the arbitrariness of the resolution as it was analyzed before. On the other hand, the petition of protection would have been adequate and effective if the Judge's decision would have been respected when he intended to impede the deportation. However, since the Judge's decision was not complied, this resource also became ineffective. With this, it is demonstrated that the internal resources were exhausted, even more when Mr. Caton was

already deported from Ecuador and there was no resource in the Ecuadorian jurisdiction to bring him back.

By virtue of all the aforesaid, all the requirements of admissibility of the petition are met.

IV. PETITION

By virtue of the aforesaid, the following is requested of the Inter American Commission of Human Rights:

1. To start the processing of the present petition and to convey its relevant parts to the Ecuadorian State;
2. To declare the present petition as admissible;
3. After the foreseen processing in the Inter American Commission Regulation of Human Rights, to declare that the Ecuadorian State has violated the rights recognized on Articles 7, 8, 9 and 25 of the American Convention about Human Rights in prejudice to the American citizen Gregory James Caton;
4. To order the reparation as a consequence of such violations, in concordance with the foreseen in International Law;

V. Communications

Any communication will be received in the following address:

Estudio Jurídico Moreno di Donato
Avenida República del Salvador N34-12 y Portugal
Twin Towers 8tavo piso
Quito Ecuador
Tel (593-2)2277727
Fax (593-2)2273776
E-mails: roberto@morenodidonato.com; mccalderon@felaw.com.ec

Sincerely,
(Signature)
Dra. Maria del Carmen Calderon